



### **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.**

Medellín, veinticinco (25) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

**DEMANDANTE:** CONRADO CARDONA CARMONA.  
**DEMANDADO:** PORVENIR S.A. y Otros.  
**TIPO DE PROCESO:** ORDINARIO.  
**DECISIÓN:** **ADICIONA y CONFIRMA.**

En la fecha, **EI TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL**, conformada por los Magistrados, Nancy Gutiérrez Salazar, Carlos Alberto Lebrún Morales y María Eugenia Gómez Velásquez, procede a resolver el Recurso de apelación interpuesto por Porvenir S.A. y Protección S.A., y el Grado Jurisdiccional de Consulta que se surte en favor de Colpensiones, frente a la Sentencia proferida en el Proceso Ordinario Laboral instaurado por el Señor **CONRADO CARDONA CARMONA**, en contra de **PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A.** y de **COLPENSIONES**.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN ESTA INSTANCIA.**

#### **DEMANDANTE.**

Solicita que se confirme la Sentencia de instancia, teniendo en cuenta que al momento de efectuarse el traslado de régimen pensional, la AFP privada no le brindó una asesoría, clara, completa y eficiente que le permitiera tomar una decisión consiente sobre las implicaciones de su futuro pensional, por lo que no es posible hablar de un traslado libre y voluntario, resultando el mismo ineficaz.

Y en lo tocante con el derecho pensional reconocido, dice que también se debe confirmar, ya que cumple con las exigencias del artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003.

#### **PORVENIR S.A.**

Expone que en este asunto no se alegó ni se probó ninguna de las causales previstas en el artículo 1741 del Código Civil, lo que conduce a que el acto jurídico de vinculación del actor con esta entidad es eficaz. Que si lo pretendido es la ineficacia que prevé el artículo 271 de la Ley 100 de 1993, esta norma es clara en establecer una sanción de carácter

administrativo, y si bien menciona que quedará sin efecto la afiliación, bajo ninguna circunstancia se refiere a lo dispuesto en los artículos 1740 y S.S. de la Obra en cita. Que con el formulario de afiliación suscrito por la Parte demandante se evidencia que la selección fue libre, espontánea y sin presiones, sin que se le pueda restar valor probatorio a tal documento. Que el demandante no hizo uso del derecho de retracto, sin que a la AFP se le puedan imponer cargas distintas a las previstas en las leyes existentes al momento en que sucedió la afiliación de aquél. Que el artículo 113, literal b) de la Ley 100 de 1993 menciona cuáles son los dineros que se deben trasladar cuando existe el cambio de régimen, esto es “el saldo de la cuenta individual, incluidos los rendimientos (...)”, lo que legalmente impide que se pueda ordenar la devolución de sumas diferentes a las referidas en esta norma; por lo que lo contrario configura un enriquecimiento sin causa a favor de un tercero dentro del negocio jurídico celebrado entre las Partes, como lo es COLPENSIONES. Y finalmente, que como los gastos de administración y las primas de seguros no corresponden a los afiliados en ninguno de los regímenes pensionales, ni financian la prestación de vejez, se debe declarar su prescripción.

#### **COLPENSIONES.**

Pide que se revoque la Sentencia de instancia, ya que en el presente caso se presenta una imposibilidad de traslado de régimen al faltarle al actor menos de 10 años para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez; pretendiendo la declaración de ineficacia bajo un interés económico, lo que no es un fundamento legal para acceder a las pretensiones invocadas.

Que no se acreditó por la Parte demandante vicio alguno en el consentimiento, sin que baste con lo manifestado por esta sobre un hecho que aconteció hace mucho tiempo; desconociéndose lo que realmente ocurrió de frente a las circunstancias de tiempo, modo y lugar de dicho traslado. Que se debe presumir la buena fe, la cual no se desvirtuó en el Proceso, siendo el demandante una persona capaz, que suscribió el formulario de afiliación en forma libre y espontánea.

Pero que de mantenerse dicha declaratoria de Ineficacia, se debe ordenar a PROTECCIÓN S.A. que proceda a retornar a satisfacción de COLPENSIONES, todas las sumas de dinero que recibió con ocasión del traslado del demandante, sin descuento alguno, debidamente indexadas y discriminando cada concepto, dentro del término de 30 días hábiles; y que de existir alguna diferencia, debe ser PORVENIR S.A. el que la asuma, con la finalidad de no afectar la sostenibilidad financiera del Sistema de pensiones en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida –RPMPD-.

La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por la Ponente, el cual se traduce en la siguiente decisión:

## **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA.**

### **ANTECEDENTES:**

#### **PRETENSIONES:**

- Declarar la nulidad y/o ineficacia de la afiliación realizada por el demandante al RAIS; y que tiene derecho a la pensión de vejez de acuerdo a lo establecido en la Ley 797 de 2003.
- Condenar a PORVENIR S.A. a trasladar a COLPENSIONES todos los aportes que el demandante efectuó al RAIS, incluidos rendimientos y cuotas de administración; a esta última demandada, a recibirlos; y a reconocerle la pensión de vejez en forma retroactiva desde la causación del derecho y los intereses moratorios.
- Subsidiariamente solicita que Porvenir S.A. le reconozca a título de indemnización de perjuicios, como mesada pensional, el valor equivalente a lo que hubiere recibido en el RPMPD.

#### **HECHOS:**

- Que nació el 4 de enero de 1957.
- Y que se afilió al ISS en el año 1995, trasladándose al RAIS el 20 de agosto de 1998, sin que se le suministrara información suficiente sobre las consecuencias del traslado.

#### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

Declaró la Ineficacia de traslado del demandante al RAIS. Ordenó a PORVENIR S.A. proceder a devolver a COLPENSIONES todas las sumas que recibió e integran la cuenta individual del primero, como aportes, rendimientos financieros, gastos de administración, primas por seguros previsionales, y aportes a Garantía de pensión mínima, dentro de los 30 días siguientes a la presente Sentencia, advirtiendo que los gastos de administración y comisiones deben transferirse de sus propios recursos y debidamente indexados. A PROTECCIÓN S.A. trasladar a COLPENSIONES los valores correspondientes a gastos de administración y comisiones, indexados. Y a COLPENSIONES, recibirlos y pagarle la pensión de vejez al actor con base en la Ley 797 de 2003 a partir de la fecha en que se verifique el retiro del Sistema pensional. Declaró implícitamente resueltas las Excepciones propuestas; y Condenó en Costas Procesales a PROTECCIÓN S.A., absolviendo de ellas a COLPENSIONES y a PORVENIR S.A.

Frente a la pensión de vejez dijo que el actor acredita los requisitos exigidos por el Art. 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Art. 9 de la Ley 797 de 2003, para tener derecho a tal prestación, faltándole la desafiliación al Sistema para el disfrute de la prestación, por lo que no se puede determinar la fecha de reconocimiento, ni la liquidación de la mesada pensional, lo cual debe ser realizado por COLPENSIONES conforme al Art. 21 de la Ley 100 de 1993.

En relación con los intereses moratorios dijo que no hay lugar a estos, porque el demandante no ha radicado solicitud de pensión de vejez, ni ha presentado retiro o desafiliación del Sistema, sin que se pueda hablar de exigibilidad ni mora en el pago de mesadas pensionales.

## **RECURSO DE APELACIÓN.**

### **PROTECCIÓN S.A.**

Pide que se revoque la Sentencia de instancia, en lo referente a la devolución de los Gastos de administración, ya que son un cobro autorizado por el legislador, están previstos en ambos regímenes pensionales y no son dineros que cubren la mesada pensional, por lo que con ellos se genera un enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones. Que el cobro de este concepto se hizo de buena fe y bajo la decisión libre y espontánea del afiliado de pertenecer al RAIS, generándose, además, unos rendimientos que han aumentado su cuenta de ahorro individual, lo que evidencia una buena gestión en la administración de la cuenta de ahorro individual de aquél; y sin que una eventual condena en perjuicios haya sido objeto del Proceso.

### **PORVENIR S.A.**

Dice que se debe revocar la sentencia de instancia, toda vez que el deber de información que se debía cumplir era el vigente para el año 1998, el cual solo exigía para la validez del traslado emitir el consentimiento con la suscripción del formulario de afiliación, tal como aconteció. Que esta AFP es un tercero de buena fe, ya que no fue quien realizó el traslado de régimen pensional, sin faltar al deber de información al momento del traslado horizontal y sin que se le puedan exigir documentos diferentes al referido formulario de afiliación.

Y frente a los gastos de administración, seguros previsionales, aportes a la garantía de pensión mínima y demás dineros diferentes a cotizaciones y rendimientos, dice que no están llamados a ser devueltos, teniendo en cuenta que están autorizados en ambos regímenes, tienen una destinación específica y generan un enriquecimiento sin causa en favor de Colpensiones, al no tener un fundamento legal para su devolución; debiéndose declarar la prescripción frente a estos.

## **CONSIDERACIONES DE LA SALA**

- **Objeto:** Determinar si en el caso a estudio, es o no procedente la declaración de Ineficacia del traslado efectuado por el demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad; las consecuencias que de ello se derivan; y si se

acreditan o no los requisitos necesarios para acceder a la pensión de vejez.  
Veamos:

En el caso concreto, el demandante se afilió al Régimen de Prima Media con Prestación Definida, inicialmente al ISS hoy COLPENSIONES, desde el **1 de junio de 1995**, según se infiere de la Historia Laboral obrante a fls. 71 a 74 -archivo 011, Primera Instancia- y el Certificado de afiliación –fl. 50 ibídem-; trasladándose al RAIS a través del Fondo privado de pensiones DAVIVIR hoy PROTECCIÓN S.A. el **20 de agosto de 1998**, tal como se desprende de la solicitud de vinculación de fl. 30 ibíd.; luego a HORIZONTE S.A. hoy PORVENIR S.A. el **13 de junio de 2001**, según la solicitud de traslado de folio 31 ibíd., el reporte SIAFP –fl 34, archivo 08 ibíd.- y el historial de vinculaciones –fl.83, archivo 15-.

Respecto al tema de la Ineficacia de traslado de Régimen pensional, conforme a la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Cas. Laboral, vertida en Sentencias Radicados 33.083 del 22 de noviembre de 2011, y 46.292 del 03 de septiembre de 2014, M.P. Dra. Elsy del Pilar Cuello Calderón, y más recientemente en las Sentencias Laborales 1452 del 3 de abril de 2019, Rad 68852 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo y 1421 del 10 de abril del mismo año, Rad. N.º 56174 M.P. Gerardo Botero Zuluaga, para los casos de afiliados, las Administradoras de Fondos de pensiones tienen el deber de gestión de los intereses de quienes se vinculan a ellas, que surge desde las etapas previas y preparatorias a la formalización de la afiliación, por lo que el engaño en el que incurre la entidad, tiene su fuente en la falta al deber de información, tanto en lo que se afirma, como en lo que se omite informar sobre lo que resulte relevante para la toma de la decisión que se persigue, independientemente que para el momento del traslado, una norma lo exija o no.

Ahora, respecto a la firma del formulario proforma, en la Sentencia Laboral 1688 del 8 de mayo de 2019, Rad. N° 68838, M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo, dicha Corporación sostuvo que:

“... no se trataba únicamente de completar un formato, ni adherirse a una cláusula genérica, sino de haber tenido los elementos de juicio suficientes para advertir la trascendencia de la decisión adoptada”.

“... la firma del formulario, al igual que las afirmaciones consignadas en los formatos preimpresos de los fondos de pensiones, tales como «*la afiliación se hace libre y voluntaria*», «*se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones*» u otro tipo de leyendas de este tipo o aseveraciones, no son suficientes para dar por demostrado el deber de información. A lo sumo, acreditan un consentimiento, pero no *informado*...”.

En similar sentido, se pronunció dicha Corporación en la SL 4360 del 9 de octubre de 2019, Rad 68852, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo.

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. las que tenían la obligación de probar en el Proceso que brindaron una asesoría personalizada y completa al demandante al momento de su traslado de régimen, analizando las circunstancias particulares de su caso, debiéndole informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de expedición de la Ley 100 de 1993, actualizado con el IPC-, debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado, para que la misma sea realmente consensuada, libre y voluntaria y otras tantas observaciones al respecto.

Y es que debe reiterarse que la labor del funcionario del Fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “DEBER DEL BUEN CONSEJO”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral; en la medida que es responsabilidad de dichas Administradoras y de sus promotores, velar por la información suministrada a sus usuarios -art. 10 Decreto 720 de 1994 por el cual se reglamentaron los arts.105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993-; lo cual fue reiterado en el artículo 2.6.10.2.3 del Decreto 2255 de 2010, que le impone a las Administradoras de Fondos de pensiones, en desarrollo de tal deber, la obligación de proporcionar a los consumidores financieros información completa, así como los beneficios, inconvenientes y efectos de la toma de la decisión.

Ahora, si bien PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. afirmaron al contestar la demanda que al demandante se le brindó la asesoría requerida para el caso –archivo 08 y 15 ibíd., respectivamente-, de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita tenían la carga de acreditarlo, y sin embargo, la prueba que trajeron al Proceso no fue lo suficientemente persuasiva de ello, pues nótese que los formularios de afiliación y/o traslado ya referenciados corresponden a unos preestablecidos que no dan cuenta de la información realmente suministrada a aquel en ese momento; y sin que con los comunicados de prensa de fls. 42 a 44, archivo 08 ibíd. –generales e ilegibles-, o con los documentos denominados “administradoras de fondos de pensiones, deber de asesoría e información al consumidor financiero” y” políticas asesorar para vincular personas

naturales” –fls. 45 y 51 ibíd.-, se pueda dar por ratificado el acto inicial de traslado de régimen pensional, al tenor de lo dispuesto en el artículo 898 del Código de Comercio, pues como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado, y no con posterioridad al mismo –Sentencia Laboral 1688 de 2019 antes citada, en la que se reitera lo expuesto en la también citada Sentencia 19447 de 2017-.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió una de las solemnidades legalmente previstas para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, como lo es el deber de información en un asunto tan importante para un afiliado por su incidencia en el derecho pensional, trayendo como consecuencia la declaración de Ineficacia del traslado de régimen, y con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de la misma, como que el demandante nunca se trasladó al RAIS; no teniendo en criterio de la Sala ninguna incidencia el hecho de que a este le falten menos de 10 años para cumplir la edad mínima para poder acceder a la pensión de vejez, pues como quedó explicado precedentemente, al declararse la ineficacia de la afiliación, las cosas vuelven al estado en el que se encontraban anteriormente.

Consecuente con lo anterior, se **CONFIRMARÁ** lo decidido por el juez de instancia al respecto.

#### **TRASLADO DE SALDOS.**

Considera la Sala que al declararse la Ineficacia del traslado del demandante al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que PORVENIR S.A. -Fondo en el que actualmente se encuentra afiliado el demandante traslade a Colpensiones el 100% de los aportes obligatorios efectuados por este, esto es, el saldo de la cuenta de ahorro individual, sus rendimientos financieros, los gastos de administración, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, y los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, tal como lo concluyó el juez de instancia, pero incluyendo además, la prima de reaseguros de Fogafín, y en caso de haberse generado, los aportes al Fondo de solidaridad pensional, causados durante el tiempo en que el mismo estuvo afiliado a dicha Administradora, incluido el tiempo en que permaneció en la fusionada Horizonte S.A.; correspondiéndole a PROTECCIÓN S.A. devolver además de lo ordenado en primera instancia, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la prima de reaseguros de Fogafín y los aportes al Fondo de solidaridad pensional -en caso de haberse generado-, descontados durante el tiempo en que el actor estuvo afiliado a dicha Administradora. Lo anterior, según lo sostuvo la Corte Suprema de Justicia, Sala de

Casación Laboral desde la Sentencia Radicado 31.989 del 9 de septiembre de 2008, M.P. Eduardo López Villegas, y más recientemente en las Sentencias Laborales 4.989 y 4.964 del 14 de noviembre de 2018, Radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, y en la 1.688 del 8 de mayo de 2019, Radicado 68.838 M.P. Clara Cecilia Dueñas Quevedo. **CONFIRMA y ADICIONA.**

Y es que no comparte La Sala los argumentos expuestos por los apoderados de las AFP's privadas en torno a la devolución de los conceptos ordenados en primera instancia, ya que ante la declaratoria de Ineficacia del traslado, al volver las cosas al estado en el que se encontraban antes de la misma, los conceptos antes referidos NO se pueden generar ni en favor de las Administradoras de Fondos privados de pensiones demandadas, ni en favor de terceros, sin que además, tal reintegro dependa de la gestión realizada, la pérdida de la especie, el detrimento del bien, o de la equivalencia de los rendimientos; sin que además, tal devolución se esté imponiendo a título de indemnización de perjuicio alguno.

Adicional a ello, La Sala se permite resaltar que el precedente judicial proveniente de los máximos Órganos de cierre tanto de la justicia constitucional como de la justicia ordinaria, vincula a los demás jueces, es decir, es de obligatorio cumplimiento, al tenor de lo dispuesto por la Corte Constitucional en la SU 354 del 25 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escruera Mayolo, en la que manifestó:

"Según lo consagrado en los artículos 234, 237 y 241 de la Constitución Política, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, como tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, al igual que la Corte Constitucional, como órgano encargado de salvaguardar la supremacía e integridad de la Carta, tienen el deber de unificar la jurisprudencia al interior de sus jurisdicciones, de tal manera que los pronunciamientos por ellas emitidos se conviertan en precedente judicial de obligatorio cumplimiento..."

(Otra Providencia en similar sentido, es la SU 611 del 4 de octubre de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).

Y en cuanto a la aplicación de la prescripción sobre tales conceptos, considera La Sala que estos hacen parte de todo lo que en conjunto va al Fondo común de naturaleza pública destinado al financiamiento de las prestaciones a las que haya lugar en favor del demandante, por lo que al estar ligadas a la pensión, adquieren el carácter de imprescriptibles; y adicionalmente, al no existir el acto jurídico de traslado, no es posible invocar la extinción de un derecho que nunca nació a la vida jurídica.

Aunado a lo anterior, advierte la Sala que el traslado de los recursos debe hacerse con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando



la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, especificando cada valor, "...junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...", según lo sostuvo la Sala de Cas. Lab. de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia Laboral 1637 del 11 de mayo de 2022, Radicado 89208, M.P. Luis Benedicto Herrera Díaz, entre otras. **ADICIONA.**

**CONFIRMAR** en lo demás.

#### **PENSIÓN DE VEJEZ:**

El Art.33 de la Ley 100 de 1993, modificado por el Art. 9 de la Ley 797 de 2003, prevé:

"Requisitos para obtener la Pensión de Vejez. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015...".

En el presente asunto según se desprende de la copia de la Cédula de C. del demandante -fl. 28, archivo 01 ibíd.-, éste nació el 4 de enero de 1957, por lo que cumplió la edad para pensionarse, esto es, 62 años, el mismo día y mes del año **2019**; y de la Historia laboral de folios 97 a 120 -archivo 15 ibíd.-, se desprende que reporta un total de **1.309** semanas cotizadas al 20 de mayo de 2021 -fecha de generación del documento-; cumpliendo así los requisitos mínimos exigidos por la referida norma para causar el derecho pensional. **CONFIRMA.**

Pensión de vejez que deberá ser reconocida al actor por COLPENSIONES, una vez PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. le trasladen los recursos anteriormente referidos, y a partir del día siguiente a la última cotización realizada por este al Sistema pensional, ya que si bien ella se causa desde el momento en que el afiliado cumple los requisitos mínimos para acceder a ella, esto es, edad y tiempo de servicio o semanas cotizadas, lo cierto es que los artículos 13 y 35 del Decreto 758 de 1990 consagran la necesaria desafiliación del Sistema para efectos del **disfrute** de la pensión de vejez ya causada, los mismos que en atención a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 100 de 1993 continúan vigentes; retiro que sin embargo ha sido interpretado por esta Sala no en sentido estricto, sino en sentido amplio, es decir, mediante la solicitud, previo cumplimiento de los requisitos mínimos –edad y semanas o tiempo de cotización-, y **el hecho de no volver a cotizar**, lo que se ha dado en llamar, retiro implícito del sistema; lo cual no acontece en el

caso de autos, pues si bien como quedó visto el demandante cumplió los requisitos mínimos, lo cierto es que este no ha cesado en sus cotizaciones, o por lo menos ello no quedó demostrado en el Proceso, pues tal como lo confesó el demandante en el interrogatorio de Parte, y se desprende de las ya referidas historias laborales, el mismo continuó laborando y haciendo aportes al Sistema pensional, después de presentada la demanda.

Y es que no se puede desconocer que el artículo 17 de la Ley 100 de 1993, modificado por el art. 4 de la ley 797 de 2003, impone la obligación de efectuar cotizaciones durante la vigencia de la relación laboral, permitiendo al afiliado mejorar su pensión, y en este caso las cotizaciones realizadas con posterioridad al cumplimiento de los requisitos legales mínimos, tienen la potencialidad de aumentar el IBL del actor y por tanto el valor de su mesada pensional.

Así las cosas, COLPENSIONES deberá liquidar la pensión de vejez del actor, teniendo en cuenta la totalidad de semanas cotizadas por él, conforme lo disponen los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993, esto es, con “el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, o con el promedio del ingreso base, ajustado por inflación, calculado sobre los ingresos de toda la vida laboral del trabajador”, concediéndole el más favorable, y que:

“El monto mensual de la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de cotización, será equivalente al 65% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje se incrementará en un 2%, llegando a este tiempo de cotización al 73% del ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta las 1.400, este porcentaje se incrementará en 3% en lugar del 2%, hasta completar un monto máximo del 85% del ingreso base de liquidación.

El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85% del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente.

A partir del 1o. de enero del año 2004 se aplicarán las siguientes reglas:

El monto mensual de la pensión correspondiente al número de semanas mínimas de cotización requeridas, será del equivalente al 65%, del ingreso base de liquidación de los afiliados. Dicho porcentaje se calculará de acuerdo con la fórmula siguiente:

$r = 65.50 - 0.50 s$ , donde:

$r$  = porcentaje del ingreso de liquidación.

$s$  = número de salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A partir del 2004, el monto mensual de la pensión de vejez será un porcentaje que oscilará entre el 65 y el 55% del ingreso base de liquidación de los afiliados, en forma decreciente en función de su nivel de ingresos calculado con base en la fórmula señalada. El 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 semanas. Adicionalmente, el 1o. de enero de 2006 se incrementarán en 25 semanas cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.

A partir del 2005, por cada cincuenta (50) semanas adicionales a las mínimas requeridas, el porcentaje se incrementará en un 1.5% del ingreso base de liquidación, llegando a un

monto máximo de pensión entre el 80 y el 70.5% de dicho ingreso, en forma decreciente en función del nivel de ingresos de cotización, calculado con base en la fórmula establecida en el presente artículo. El valor total de la pensión no podrá ser superior al ochenta (80%) del ingreso base de liquidación, ni inferior a la pensión mínima”.

**CONFIRMA.**

Costas Procesales en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y PORVENIR S.A. o vencidas en el Recurso, distribuidas en partes iguales, y en favor del demandante. Agencias en derecho: 1 SMLMV.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**DECIDE:**


**PRIMERO: ADICIONAR** los numerales **SEGUNDO** y **TERCERO** de la Sentencia proferida por el **Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Medellín** el 26 de abril de 2022, dentro del Proceso Ordinario Laboral promovido por el Señor **CONRADO CARDONA CARMONA**, en contra de **PROTECCIÓN S.A. PORVENIR S.A.** y de **COLPENSIONES**, en cuanto que la penúltima demandada deberá efectuar a esta última, la devolución del 100% de los aportes obligatorios efectuados por el demandante ordenados en la Sentencia de primera instancia, pero incluyendo además, la prima de reaseguros de Fogafín, y en caso de haberse generado, los aportes al Fondo de solidaridad pensional, causados durante el tiempo en que el mismo estuvo afiliado a dicha Administradora, incluido el tiempo en que permaneció en la fusionada Horizonte S.A.; correspondiéndole a **PROTECCIÓN S.A.** devolver además de lo ordenado en primera instancia, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, la prima de reaseguros de Fogafín y los aportes al Fondo de solidaridad pensional -en caso de haberse generado-, descontados durante el tiempo en que el actor estuvo afiliado a dicha Administradora; entregando una y otra, la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, según las consideraciones de esta Sentencia.

**SEGUNDO: CONFIRMAR** en lo demás.


**TERCERO:** Costas Procesales en esta instancia a cargo de PROTECCIÓN S.A. y de PORVENIR S.A., distribuidas en partes iguales, y en favor del demandante. Agencias en derecho: 1 SMLMV.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO** y se firma en constancia.


Los Magistrados,



**NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR**



**CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES**



**MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ**